

INFORMARTIVO DE RELATORIA OCTUBRE 2024

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA



Magistrados

Dra. Nelcy Vargas Tovar

Dr. Enrique Dussán Cabrera

Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Dr. Jorge Alirio Cortes Soto

Dr. José Miller Lugo Barrero

Dr. Ramiro Aponte Pino

Relator

Dr. Danny Joan Guevara Silva

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez	Reparación Directa 50001233300020140028501 (70.247) Sentencia del 30 de agosto de 2024
<p>La Subsección confirmó sentencia que denegó las pretensiones de la demanda por la que se pretendía la declaratoria de nulidad de un acto de cancelación de proceso de selección adelantado por Ecopetrol S.A. que buscaba contratar el servicio de transporte terrestre de su personal en el Departamento del Meta.</p> <p>La Sala indicó que Ecopetrol está exceptuada del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por lo que sus actos precontractuales no son actos administrativos. Lo que significa que tales decisiones deben analizarse bajo el derecho civil y comercial, y no como actos sujetos a control por nulidad y restablecimiento del derecho.</p> <p>Para el Alto Tribunal, el acto mediante el cual Ecopetrol cancela un concurso cerrado de contratación no tiene la naturaleza de acto administrativo, y las controversias sobre este acto precontractual deben tramitarse a través del medio de control de reparación directa.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A C.P. María Adriana Marín	Reparación Directa 25000-23-36-000-2018-00254-01 (67165) Sentencia del 13 de septiembre de 2024
<p>El Alto Tribunal confirmó fallo condenatorio en contra del Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Fiscalía General de la Nación por la muerte y desaparición de una persona que se desplazaba por inmediaciones del palacio de justicia el 6 de noviembre de 1985.</p> <p>La Subsección destacó irregularidades en la identificación del cadáver de René Francisco Acuña Jiménez, quien, a pesar de ser reconocido por familiares, fue enviado a una fosa común. Sus restos fueron identificados y entregados a familiares en 2016.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar	Nulidad y Restablecimiento del Derecho <u>25000-23-42-000-2018-00498-01</u> <u>(4996-2022)</u> Auto del 10 de octubre de 2024
<p>Encontrándose el proceso para proferir fallo de segunda instancia, la Sección estudió la aplicación de la Ley 2381 de 2024, vigente desde el 16 de julio de 2024, que establece que la caducidad se aplica desde su vigencia. Esta norma modificó el término de caducidad para acciones administrativas y contencioso administrativas sobre pensiones, aplicándose también a las acciones en curso.</p> <p>Sin embargo, la Sala determinó que, según el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, las leyes procesales prevalecen desde su vigencia, pero los procesos en curso se rigen por las leyes vigentes al inicio del proceso.</p> <p>Concluyó la Corporación, que la demanda de Colpensiones, presentada dentro del término vigente en ese momento, debe analizarse bajo las normas anteriores, permitiendo la presentación en cualquier tiempo para nulidad de actos que reconozcan prestaciones periódicas.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Sala de Conjueces C.P. José Ascensión Fernández Osorio	Nulidad <u>1101-03-25-000-2012-00328-00</u> <u>(1292-2012)</u> Sentencia del 10 de septiembre de 2024
<p>La Sala al estudiar la legalidad de decretos del gobierno nacional que regulan la prima especial para servidores públicos, especialmente de la Rama Judicial y Procuraduría General de la Nación, consideró que violaron el marco constitucional y legal del artículo 53 de la Constitución y el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.</p> <p>Concluyó la Sección que estos decretos, al considerar la prima especial del 30% como no salarial, redujeron la asignación básica mensual de los funcionarios. Así mismo, que la nulidad parcial de los decretos no elimina la prima especial, sino que sigue vigente según la jurisprudencia.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Juan Carlos Cortés González	Sentencia T-320 del 01 de agosto de 2024
<p>La Sala Segunda de Revisión analizó cuatro tutelas sobre estabilidad laboral reforzada por salud. Tres fueron declaradas improcedentes por incumplir el requisito de subsidiariedad, ya que existen vías judiciales ordinarias para estos casos.</p> <p>En el caso procedente, la Sala amparó transitoriamente el derecho mientras se obtiene una decisión definitiva. La Corte estableció que la estabilidad laboral reforzada aplica a todas las enfermedades que impacten sustancialmente el desempeño laboral y a todo tipo de contrato laboral.</p> <p>Para su procedencia, se requiere: una condición de salud que dificulte el trabajo, que el empleador conozca previamente esta condición, y que no exista justificación suficiente para el despido. La carga probatoria recae en el empleador.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Natalia Ángel Cabo	Sentencia T-408 del 29 de abril de 2024
<p>La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que los animales de compañía son inembargables, al revisar el artículo 594 del Código General del Proceso. La decisión establece que la lista de bienes inembargables debe incluir a las mascotas, además de los otros 16 elementos ya contemplados, como condecoraciones y uniformes militares.</p> <p>La demanda argumentó que excluir a los animales de compañía constituía una omisión legislativa que afectaba derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la intimidad. Además, señaló que ignoraba el deber de protección animal y su condición de seres sintientes.</p> <p>La Corte declaró la constitucionalidad de la norma, condicionándola a la inclusión de los animales de compañía como bienes inembargables.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera	Sentencia T-308 del 29 de julio de 2024
<p>La Sala Séptima de Revisión amparó el derecho a la protección y asistencia social integral de Manuela y Francisco, madre e hijo de 90 y 70 años, quienes quedaron en situación de calle tras ser víctimas de una estafa. A pesar de recibir un apoyo</p>	

económico mensual de 260.000 pesos, alegaron que su nivel de Sisbén no refleja su vulnerabilidad real.

La Corte reiteró que los adultos mayores en situación de vulnerabilidad son sujetos de especial protección constitucional y tienen derecho a un sistema integral de subsidios. Se determinó que la Alcaldía de Bogotá falló al no informarles sobre los servicios y beneficios disponibles.

La Corte ordenó a la Secretaría de Integración Social brindar información y asistencia en los trámites necesarios.

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. José Fernando Reyes Cuartas.	Sentencia T-208 del 06 de junio de 2024
<p>La Sala Novena de Revisión estudió el caso de Laura, diagnosticada con cáncer gastroesofágico, quien solicitó amparo de sus derechos tras la no renovación de su contrato de prestación de servicios.</p> <p>La Corte determinó que procedía la tutela como mecanismo transitorio debido a la situación de debilidad manifiesta de la accionante: su diagnóstico de cáncer, desnutrición grado III, múltiples tratamientos y su condición de madre cabeza de familia. Se concluyó que la no renovación del contrato fue discriminatoria al desconocer la protección de estabilidad laboral reforzada.</p> <p>La Corte ordenó renovar el contrato bajo condiciones similares, con posibilidad de reubicación según su estado de salud, y estudiar la asignación de una vacante en planta.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Juan Carlos Cortés Gonzalez	Sentencia T-262 del 05 de julio de 2024
<p>La Sala Segunda de Revisión amparó los derechos de un campesino de 80 años, víctima del conflicto armado, quien no fue notificado de un proceso de restitución de tierras sobre el predio que habita hace más de 20 años en Aracataca, Magdalena.</p> <p>La Corte determinó que se vulneraron sus derechos al debido proceso, defensa técnica, vida, vivienda y dignidad humana, al no brindarle asesoría jurídica pese a su condición de víctima y sujeto de especial protección.</p> <p>La Sala ordenó remitir el expediente al Tribunal Superior de Cartagena para considerar la oposición presentada por el accionante y exhortó a la Defensoría del</p>	

Pueblo y la Procuraduría a acompañar el proceso para proteger las garantías de todas las víctimas involucradas.

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Cristina Pardo Schlesinger	Sentencia T-386 del 12 de septiembre de 2024
<p>La Sala Octava de Revisión estudió tres tutelas de personas privadas de la libertad en cárceles de Valledupar y La Dorada, relacionadas con exposición a temperaturas extremas, alimentación inadecuada y condiciones indignas.</p> <p>La Corte amparó los derechos a la dignidad humana y trato digno, con efectos inter comunes, reconociendo el derecho a no ser sometido a temperaturas extremas. Se ordenó mejorar la infraestructura para proteger del clima extremo, garantizar ventilación adecuada y atender necesidades específicas, como el tratamiento hormonal de una mujer trans.</p> <p>La Corte destacó que el cambio climático y fenómenos meteorológicos agravan las condiciones en estas cárceles, ordenando al INPEC, USPEC y Ministerio de Justicia verificar y mejorar las condiciones de ventilación.</p>	